

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Aprobado ACTA 210

Medellín, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Luz Victoria Barrera Cárdenas
DEMANDADO(S)	Colpensiones
RADICADO	05001-31-05-017-2023-00118-01 (P 18723)
DECISIÓN	Confirma y revoca
MAGISTRADA PONENTE	Carmen Helena Castaño Cardona

En la fecha, el **Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral**, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario promovido por **LUZ VICTORIA BARRERA CÁRDENAS** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-** con radicado **05001-31-05-017-2023-00118-01**

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

Auto. Reconocimiento de personería

En los términos del poder conferido por la doctora ISABEL CRISTINA GONZÁLEZ RESTREPO, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, el despacho le reconoce personería suficiente para actuar a la doctora SANDRA MILENA NARANJO SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía 39.175.420 y portadora de la tarjeta profesional 225.677 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación judicial de COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES:

Pretensiones:

La demandante solicita la reliquidación de su pensión de vejez desde el 1° de noviembre de 2013, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 90 % por ser beneficiaria del régimen de transición, en aplicación del decreto 758 de 1990, así como los intereses moratorios del artículo 141 de 1993 o en subsidio la indexación.

Hechos:

Como fundamento de sus pretensiones expuso que arribó a los 55 años de edad el 21 de febrero de 2013 y en toda su vida laboral acreditó 1984 semanas laboradas entre tiempos públicos y privados.

Mediante resolución GNR 296739 del 8 de noviembre de 2013, Colpensiones le reconoció la pensión de vejez con fundamento en la ley 797 de 2003, teniendo en cuenta 1956 semanas cotizadas, un IBL de \$7.532.924 y una tasa de reemplazo de 74.11 %, lo que arrojó una mesada pensiona para el 1° de noviembre de 2013 de \$5.582.650.

La decisión anterior fue modificada a través de la resolución GNR 282554 del 12 de agosto de 2014, reconociéndose la prestación con fundamento en la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta 1976 semanas de cotización, un IBL de \$7.591.210 al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 75%, generándose una mesada por valor de \$5.693.408, efectiva al 1° de noviembre de 2013.

La reliquidación pensional fue negada por Colpensiones por medio de las resoluciones SUB 259539, 327839 y DIR 22097 de 2018.

Contestaciones:

Colpensiones: se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al señalar que la pensión de vejez de la demandante fue liquidada en debida forma. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación de pagar reliquidación de pensión de vejez, improcedencia de pagar intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, improcedencia de la indexación, imposibilidad de condena simultánea de pagar intereses moratorios e indexar las sumas, prescripción, buena fe Colpensiones, imposibilidad de condena en costas, compensación y pago, innominada.

Sentencia de primera instancia:

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **23 de junio de 2023, corregida el día 26 del mismo mes y año**, declaró que la demandante tiene derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con base en el decreto 758 de 1990, aplicándosele una tasa de reemplazo del 90 % sobre el IBL atendido en la resolución GNR 282554 del 12 de agosto de 2014, arrojando una mesada pensional para el 1° de noviembre de 2013 por valor de \$6.832.089.

Condenó a **Colpensiones** a pagar la suma de \$67.394.854 por concepto de retroactivo pensional causado del 22 de febrero de 2020 al 31 de mayo de 2023, suma que deberá ser indexada.

Ordenó que a partir del 1° de junio de 2023 se continúe pagando una mesada pensional por valor de \$11.032.219.

Autorizó los descuentos en salud sobre los valores condenados. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y no condenó en costas procesales.

Apelación:

La decisión anterior fue recurrida en apelación por la demandante y Colpensiones, así:

Demandante: solicita se revoque la sentencia en lo relacionado a la negativa de los **intereses moratorios** y al no reconocimiento de la condena en costas procesales. Señaló que, de conformidad con la sentencia SL2609-2021, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de las mesadas adeudadas, independientemente de la buena o mala fe de la entidad. Los intereses buscan resarcir económicamente encaminado a aminorar los efectos adversos que produce el acreedor la mora del deudor por el cumplimiento de unas obligaciones, dado su carácter resarcitorio y no sancionatorio. Con relación a la negativa de imponer **costas procesales**, solicita su condena, toda vez que estas deben ser impuestas a cargo de la parte vencida en juicio, de conformidad con lo señalado en el artículo 365 del Código General del Proceso, además de que no se tiene en cuenta el análisis de la buena o mala fe de la entidad demandada, pues esta última se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

Colpensiones: Solicita se revoque la sentencia y en su lugar se absuelva de todas condenas impuestas en su contra, toda vez que la pensión de la demandante está liquidada conforme a derecho. Aludió a la sentencia SU-769 de 2014 que refiere a que la sumatoria de tiempos es viable en la medida que se reconozca la pensión pero no para su reliquidación.

Consulta

Con ocasiones de las condenas que le fueron impuestas a **Colpensiones** se envió el expediente a este Tribunal para conocer del proceso en grado de Consulta.

Alegatos:

Demandante: solicita la confirmación de la sentencia debido a que le asiste derecho al reajuste de la pensión de vejez, en los términos pretendido con la demanda. En lo referente a las costas procesales, señaló que se debe condenar a Colpensiones a su pago.

Colpensiones: los alegatos fueron presentados en términos similares a los indicados con el escrito de contestación y la apelación de la sentencia, solicitando como consecuencia la revocatoria de la sentencia. Advirtió que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia refiere a la imposibilidad de la sumatoria de tiempos públicos y privados para efectos pensionales con el decreto 758 de 1990.

II. CONSIDERACIONES:

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos para resolver en esta instancia de conformidad con las apelaciones formuladas y el grado jurisdiccional de consulta abarcará los siguientes temas: (i) reliquidación de la pensión de vejez bajo el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, dándole aplicación a lo preceptuado en el decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta la sumatoria de tiempos privados y públicos sin cotización; de ser procedente la misma, se analizará el retroactivo y la prescripción; (ii) intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993; y, (iii) costas procesales.

Pruebas relevantes

Antes de resolver el problema planteado considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. Historia laboral de la demandante emitida por Colpensiones, actualizada al 9 de diciembre de 2022, donde se lee que cuenta con 959.23 semanas cotizadas. (01/ pág. 24)
2. Resolución GNR 296739 del 8 de noviembre de 2013, por medio de la cual Colpensiones reconoce la pensión de vejez a la actora a partir del 1° de noviembre de 2013 en cuantía mensual de \$5.582.650, con fundamento en la ley 797 de 2003 (01/ pág. 35)
3. Resolución GNR 282554 del 12 de agosto de 2014, por medio de la cual Colpensiones modifica la resolución anterior y reliquida la pensión de vejez a la actora a partir del 1° de noviembre de 2013 en cuantía mensual de \$5.693.408, con fundamento en el régimen de transición y la ley 71 de 1988 (01/ pág. 42)
4. Resoluciones SUB 259536 y DIR 22097 de 2018, Colpensiones negó la reliquidación de la pensión de vejez (01/ pág. 48 y 57)

i) Pensión de vejez – sumatoria de tiempos públicos y privados bajo el decreto 758 de 1990.

Para comenzar es necesario señalar que la ley 100 de 1993 en su artículo 36 consagró el régimen de transición pensional como una protección a aquellas personas que, a juicio del legislador, estaban próximas a cumplir los requisitos para acceder a su pensión; para este grupo poblacional dispuso que se respetarían las condiciones de edad, semanas cotizadas y monto consagradas en el régimen anterior. Esta prerrogativa consagra en dicho artículo como requisitos, que al momento de entrar en vigencia el sistema cuenten con 40 o más años de edad, en el caso de hombres, o 15 o más años de servicios.

La señora Barrera Cárdenas es beneficiaria del régimen de transición, pues así lo reconoce Colpensiones en las resoluciones que le concedió la pensión de vejez y en las que negó su reliquidación. Asimismo, se destaca que la actora nació el 21 de febrero de 1958, arribando a los 55 años de edad el mismo día y mes del año 2013 y cuenta con 1984 semanas laboradas.

Ahora, el decreto 758 de 1990, consagra que el derecho a la pensión de vejez se causa una vez el afiliado, en este caso mujer, cumpla 55 o más años de edad y cuente con un mínimo de 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o que acredite un número de 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo.

Pues bien, para hablar de la sumatoria de tiempos públicos y privados se debe hacer remisión a lo dispuesto en la sentencia de unificación SU-769 de 2014, proferida por la Corte Constitucional, en la cual se permite sumar tiempos públicos y privados, bajo lo dispuesto en el decreto 758 de 1990, criterio que acoge esta Sala, sentencias de unificación que tiene efectos vinculantes, ya que busca dar precisión a la interpretación de la norma para mayor seguridad jurídica, sin que sea de recibo que su aplicación deba supeditarse a la vigencia de la sentencia de unificación sino al criterio vinculante de la misma.

Del párrafo precedente debe explicar la Sala que, si bien en anteriores oportunidades, en lo que respecta a la sumatoria de tiempos públicos y privados, se venía aplicando lo establecido en la sentencia T-508 de 2017, en donde la sumatoria de tiempos solo era aplicable para garantizar el acceso a la pensión de vejez, como sucede en el presente caso, y no para reliquidar, es decir, incrementar la tasa de reemplazo, ante toda duda interpretativa la Corte Constitucional en la sentencia T-219 de 2021, señaló:

“Finalmente, en lo que respecta a la aparente distinción entre una situación de reconocimiento y otra de reliquidación, es necesario señalar que, además de que esa diferencia no tiene sustento en la línea jurisprudencial construida, resulta abiertamente violatoria de los principios de igualdad y de favorabilidad. En efecto, bajo esa distinción, la definición de una misma situación pensional conforme al artículo 53 superior se limitaría por un escenario formal en el que no incide la actividad del trabajador.”

Este criterio fue reiterado en la sentencia SU-273 de 2022, en donde la Alta Corte Constitucional, resaltó la unanimidad que con su criterio guarda la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, siendo muestra de esta particular la sentencia SL2557 de 2020, en la que órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria indicó:

“... conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.”

Es claro para la Sala que conforme con el precedente jurisprudencial contenido entre otras en las sentencias T-090 de 2009, T-181 de 2011, T-193 de 2013 y SU-769 de 2014, es posible la sumatoria de tiempos públicos sin cotización con aportes realizados al ISS hoy Colpensiones para efectos de aplicar el Decreto 758 de 1990, desarrollo acogido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia SL1947-2020, en la que sustentó su nuevo criterio, indicando que la Ley 100 de 1993 prevé diversos instrumentos de financiación de las pensiones, como: bonos, cálculos actuariales o cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna y dado que las pensiones de transición se causan en su vigencia, es procedente su computo sin distinción del origen; por lo tanto, esta Sala en reconocimiento de la fuerza

vinculante del precedente acata el mismo, abandonando cualquier interpretación que en contrario sostuviera.

Así las cosas, con las historias laborales anexadas al plenario, junto con las resoluciones emitidas por Colpensiones, se tiene que la demandante cumple cabalmente con el requisito de las 1000 semanas exigidas en cualquier tiempo, cumpliendo lo exigido por el decreto 758 de 1990.

Con relación al monto de la pensión, en la resolución GNR 282554 de 2014 se tiene en cuenta un IBL de \$7.591.210, al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 75 %, arrojando una mesada de \$5.693.408, producto de ser beneficiaria del régimen de transición, aplicándosele la ley 71 de 1988; sin embargo, como se ha venido señalando, también le es aplicable el decreto 758 de 1990, norma que contempla como tasa de reemplazo un 90 % del IBL siempre que se acrediten 1250 semanas laboradas, criterio que cumple la demandante.

En los términos anteriores, atendiendo a un IBL de \$7.591.210 y una tasa de reemplazo del 90 %, la mesada pensional en favor de la actora para el 1° de noviembre de 2013 es de \$6.832.089.

Con relación a la **excepción de prescripción**, se encuentran afectadas por este fenómeno extintivo las mesadas causadas con anterioridad al 22 de febrero de 2020, debido a que la reclamación administrativa, por medio de la cual se interrumpió el término de prescripción trienal de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se presentó el 22 de febrero de 2023 y la demanda se promovió el 17 de marzo del mismo año.

Se destaca que, si bien del contenido de las resoluciones SUB 259539 y DIR 22097 del 1° de octubre y 26 de diciembre de 2018, respectivamente, se lee que la accionante reclamó la reliquidación de la pensión el 29 de agosto de 2018, es claro que para el momento en que se radicó la demanda transcurrió un término superior a 3 años, viéndose afectadas aquellas mesadas por la prescripción.

Procedió esta Sala a realizar el cálculo aritmético del retroactivo causado por concepto del mayor valor de la mesada pensional del 22 de febrero de 2020 al 31 de mayo de 2023; sin embargo, en la liquidación del juzgado se aprecia un error, pues este ascendió a \$67.394.854, cuando en realidad debió ser de **\$67.445.340**, pero al no haber sido objeto de apelación la sentencia en este punto, la decisión se mantendrá.

No obstante, se actualizará el retroactivo hasta el 31 de julio de 2023 de conformidad con lo señalado en el artículo 283 del Código General del Proceso, el cual asciende a **\$71.072.258**.

ii) Intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993

En cuanto a los intereses moratorios, es importante recordar que estos fueron creados por la ley 100 de 1993 para resarcir el retardo ocasionado por la entidad de seguridad social que estando obligada al pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, no las cancele de manera oportuna. Así lo prevé el artículo 141 de la ley 100 de 1993. No obstante, lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha advertido que en situaciones excepcionales no son procedentes los pretendidos intereses, como “*cuando el reconocimiento deviene de un cambio de criterio jurisprudencial*”. Así se pronunció en sentencia SL4332-2022. Nótese entonces que Colpensiones negó el reconocimiento de la reliquidación pensional en el año 2018, pero solo fue hasta el año 2020 donde la Corte Suprema de Justicia varió su criterio con relación a la sumatoria de tiempos públicos y privados. Estos motivos son suficientes para conducir a esta Sala para negar los pretendidos intereses.

Lo que sí procederá, tal y como lo señaló la a quo, es la indexación de las condenas, toda vez que, es de advertir que los efectos de la inflación son quizá más significativos en el campo laboral y de la seguridad social, dado el carácter alimentario de las prestaciones que el empleador o la entidad de seguridad social debe al trabajador o pensionado, y por lo tanto la doctrina y la jurisprudencia acuden a la corrección monetaria con el fin de procurar que el pago de lo debido sea cabal, íntegro o completo, o dicho en otros términos que el deudor cubra la prestación en su valor real.

En este escenario, se **CONFIRMARÁ** la condena al pago de la indexación del reajuste pensional objeto de esta sentencia, con base en la certificación mensual del Índice de Precios al Consumidor –IPC-, expedida por el DANE entre la causación de cada mesada y hasta el momento efectivo del pago.

iii) Costas procesales

En lo que tiene que ver con las costas procesales, en innumerables providencias se ha dejado claro que nuestra ley procesal ha consagrado en esta materia el criterio objetivo, es decir, que las costas corren en todo caso a cargo del vencido en juicio, sin que sea admisible tener en consideración la conducta asumida por las partes dentro del mismo, es decir, sin considerar si se actuó o no de buena fe, ya que solo basta con el hecho de haber resultado vencido en juicio para que se imponga tal condena. En el presente caso Colpensiones fue el único vencido, además de que se resistió en todo momento a las pretensiones de la demandante, por lo que tiene la obligación de reconocer la prestación económica solicitada. En tales términos, se **REVOCARÁ** la sentencia de instancia en tal sentido. En

su lugar, se **CONDENARÁ** al pago de las costas procesales de la primera instancia a Colpensiones.

En la segunda instancia no se causaron costas procesales, toda vez que la apelación formulada por la demandada no salió avante, mientras que la de la demandante solo lo hizo parcialmente.

III. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la **Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el **23 de junio de 2023, corregida el día 26 del mismo mes y año**, en el proceso ordinario adelantado por **LUZ VICTORIA BARRERA CÁRDENAS contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-**

SEGUNDO: El retroactivo pensional liquidado hasta el 31 de julio de 2023 asciende a **\$71.072.258**, conforme se señaló en la motivación de esta providencia.

TERCERO: Se **REVOCA** la absolución por costas procesales. En su lugar, el pago de estas se impone a cargo de Colpensiones.

CUARTO: En la segunda instancia no se causaron costas procesales.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ